



Trascender, Contabilidad y Gestión. Vol. 11, Núm. 31 (enero – abril del 2026).

Universidad de Sonora. Departamento de Contabilidad. México.

ISSN: 2448-6388. Reserva de Derechos 04-2015-04172070800-203.

Inclusión y educación financiera en San Luis Potosí

Inclusion and financial education in San Luis Potosí

Louis Valentín Mballa ¹ ; Juan Ignacio Barajas Villarruel ² ; Wilfredo Orama-González ³

Recibido: 20 de agosto de 2025.

Aceptado: 18 de febrero de 2026.

DOI: <https://doi.org/10.36791/tcg.v11i31.298>

JEL: G53. Cultura financiera; educación financiera, comportamiento financiero.

G41. Ahorro doméstico, finanzas personales.

O16. Mercados financieros; inversión; política financiera; desarrollo financiero.

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar el nivel de educación e inclusión financiera de la población adulta de la capital de San Luis Potosí, con el fin de identificar cómo variables sociodemográficas como edad, género, nivel educativo e ingresos influyen en el uso de productos y servicios financieros. El estudio responde a la escasa evidencia empírica disponible sobre educación financiera en contextos regionales del país. La investigación adopta un enfoque cuantitativo, transversal y correlacional. Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra de 384

ciudadanos mayores de 18 años residentes en la capital del estado. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva y pruebas no paramétricas (Rho de Spearman, Chi cuadrada y t de Student). Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados percibe ingresos mensuales inferiores a \$6,000 pesos, lo que limita su capacidad de ahorro e inversión y reduce el interés por instrumentos financieros más complejos. Asimismo, la edad no influye significativamente en la tenencia de cuentas de ahorro o fondos para el retiro, mientras que el nivel educativo se

¹ Louis Valentín Mballa. Doctor en Ciencias políticas y Sociales. Profesor Investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Correo: louis.mballa@uaslp.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9082-9055>.

² Juan Ignacio Barajas Villarruel. Doctor en Educación con énfasis en tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Profesor Investigador de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Autor de correspondencia. Correo: willie@uaslp.mx. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6908-8731>.

³ Wilfredo Orama-González. Doctor en Educación con énfasis en tecnología Instruccional y Educación a Distancia. Profesor Investigador en la Unidad de Educación General de la Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, Puerto Rico. Correo: wilfredo.orama@sagrado.edu. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1601-8017>.

asocia positivamente con el uso de tarjetas de crédito. Se concluye que fortalecer la inclusión financiera requiere ampliar la educación financiera y promover productos financieros adaptados a los niveles de ingreso de la población.

Palabras clave: inclusión financiera, educación financiera, hábitos financieros.

Abstract

This study analyzes the level of financial inclusion among the adult population in the capital city of San Luis Potosí, Mexico, considering variables such as age, gender, educational level, income, and financial habits. A sample of 384 citizens was surveyed using a structured questionnaire. The data were processed through descriptive statistics and non-parametric tests, including Spearman's Rho correlation, Chi-square, and Student's t-test. The results indicate that most respondents earn monthly incomes below \$6,000 MXN, which significantly limits their capacity for saving and investment and reduces their interest in more sophisticated financial instruments such as investment funds or stock market assets. The findings also show that age does not significantly influence the ownership of savings accounts or retirement funds. Likewise, the level of education does not determine financial planning practices, although it shows a positive association with the use of credit cards. The study concludes that strengthening financial inclusion in San Luis Potosí requires expanding banking coverage, designing financial products adapted to middle- and low-income populations, and promoting comprehensive financial education programs that encourage the diversified use of financial services. These actions could contribute to increasing financial knowledge and strengthening public trust in the formal financial system.

Keywords: Financial inclusion, financial education, financial behavior.

Introducción

La educación financiera constituye un componente fundamental para que las personas gestionen de manera eficiente sus recursos, tomen decisiones informadas y accedan de manera responsable a productos y servicios financieros. Diversas investigaciones internacionales (Taylor & Wagland, 2009; Cull & Whitton, 2011; Navickas, Gudaitis & Krajinakova, 2014; Stangl & Matthews, 2012) han mostrado que la población, en distintos contextos socioeconómicos, presenta deficiencias en su formación financiera, lo que limita su capacidad para planificar, ahorrar e invertir. En México, diagnósticos como los de Banamex (2014), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Banco de México evidencian que tanto jóvenes como adultos carecen de habilidades básicas para administrar su dinero y comprender conceptos como tasas de interés, crédito o instrumentos de ahorro e inversión.

La literatura especializada coincide en que existe una relación directa entre educación financiera e inclusión financiera: a mayor conocimiento y habilidades, mayor es el uso eficiente de productos y servicios bancarios y, por ende, mayor la posibilidad de mejorar el bienestar económico individual y colectivo (Raccanello & Herrera, 2014a). Esta conexión es particularmente relevante porque la inclusión financiera, entendida como el acceso y uso efectivo de servicios financieros formales, facilita el ahorro, el crédito, la inversión y la acumulación de activos, elementos clave para la movilidad social y la reducción de la desigualdad (Banco Mundial, 2022).

A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial para promover la educación financiera, en América Latina persisten amplias brechas en el conocimiento y uso de servicios financieros. En países como Colombia, Guatemala, México y Perú, menos de la mitad de la población

comprende el concepto de “tasa de interés” y sabe calcularla en términos simples (García, Grifoni, López & Mejía, 2013). La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del año 2021 señala que en México el 67 % de la población adulta posee al menos un producto financiero, pero solo el 37 % lleva un registro de sus gastos, y la mayoría lo hace de manera mental, reduciendo la confiabilidad de la información (ENIF, 2021).

En el estado de San Luis Potosí, los estudios sobre educación e inclusión financiera son limitados y la información disponible sugiere que una parte importante de la población adulta carece de estrategias básicas para planificar sus finanzas (Gómez, 2015). La ENIF 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), indica que el estado presenta niveles relativamente bajos de cobertura financiera en comparación con otras entidades del país, lo que refleja un acceso desigual y limitado a productos y servicios financieros formales, especialmente en sectores con menor desarrollo económico (CNBV, 2022).

A esta situación se suma un contexto educativo que condiciona las habilidades financieras de la población. Según el Programa Institucional SIFIDE, en San Luis Potosí el 6.5 % de las personas mayores de 15 años no cuenta con escolaridad, el 56.9 % solo ha concluido la educación básica y apenas el 19.7 % ha completado estudios superiores (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2021). Este panorama es consistente con la evidencia que señala que menores niveles de escolaridad se asocian con una menor alfabetización financiera y una participación más limitada en el sistema financiero formal (García et al., 2013). La combinación de baja inclusión financiera, limitada cobertura bancaria y rezagos educativos profundiza las brechas de desigualdad económica y social en el estado. Tal como señalan García Muñoz, Ruiz Dávila y Marín Montoya (2020), la inclusión financiera, acompañada de educación financiera efectiva, constituye un motor para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

En este contexto, el problema de investigación radica en la limitada evidencia empírica que permita comprender cómo las características sociodemográficas de la población influyen en su nivel de educación financiera y en el uso de productos y servicios financieros formales en la capital de San Luis Potosí. Aunque existen diagnósticos nacionales sobre inclusión financiera, los estudios regionales siguen siendo escasos, lo que dificulta diseñar estrategias específicas que respondan a las condiciones económicas y sociales de cada territorio.

A partir de este planteamiento, el objeto de estudio de la presente investigación es el nivel de educación financiera y el uso de productos y servicios financieros formales entre la población adulta de la ciudad de San Luis Potosí. En este sentido, la unidad de análisis está conformada por ciudadanos mayores de 18 años residentes en la capital del estado, quienes participan en el sistema financiero en diferentes grados y bajo diversas condiciones socioeconómicas.

Con base en lo anterior, el objetivo del estudio es analizar el nivel de educación e inclusión financiera de la población adulta de la capital potosina y determinar de qué manera variables como la edad, el género, el nivel educativo y el ingreso inciden en el uso de productos y servicios bancarios, así como en la planeación y manejo de las finanzas personales. Se parte de la hipótesis de que un mayor nivel de educación financiera se asocia positivamente con un uso más diversificado y eficiente de productos y servicios financieros.

Para comprobar esta hipótesis, la investigación adopta un diseño no experimental, transversal y con enfoque cuantitativo correlacional. Se emplean encuestas estructuradas aplicadas a residentes mayores de 18 años en la capital del estado, lo que permite analizar la relación entre variables sociodemográficas y comportamientos financieros sin manipular las condiciones del estudio. Los resultados permitirán generar evidencia empírica que sirva como base para el diseño de políticas y programas orientados a fortalecer la educación financiera y ampliar la inclusión financiera en San Luis Potosí.

1. Marco referencial

La educación financiera y la inclusión financiera constituyen elementos estratégicos para el desarrollo económico y social, ya que permiten a las personas optimizar la gestión de sus recursos, acceder de manera segura a servicios financieros y fortalecer su resiliencia frente a contingencias económicas. En contextos como el de San Luis Potosí, donde la evidencia empírica revela rezagos en la alfabetización financiera y una limitada diversificación en el uso de productos bancarios, el análisis teórico de estos conceptos resulta indispensable para comprender las dinámicas económicas y sociales que influyen en el comportamiento financiero de la población.

En este sentido, el presente marco referencial aborda tres ejes conceptuales interrelacionados: la educación financiera, la planeación de las finanzas personales y la inclusión financiera. Estos componentes permiten comprender cómo el conocimiento financiero influye en la toma de decisiones económicas y en el acceso efectivo a servicios financieros formales, articulando dichos conceptos con la realidad socioeconómica del estado de San Luis Potosí.

1.1. Educación financiera: concepto, alcance y relevancia

La educación financiera se concibe como un proceso formativo continuo mediante el cual las personas adquieren conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permiten comprender el funcionamiento del sistema financiero, evaluar riesgos, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas que favorezcan su bienestar económico (Atkinson & Messy, 2011). Más allá de la adquisición de conocimientos teóricos, la educación financiera busca que los individuos desarrollen la capacidad de aplicar estos saberes en contextos económicos cambiantes y cada vez más complejos.

De acuerdo con la Comisión Europea, este enfoque se sustenta en tres pilares fundamentales: la adquisición de

conocimientos financieros básicos, el fortalecimiento de competencias prácticas para la gestión del dinero y el ejercicio responsable de las decisiones financieras en la vida cotidiana (Domínguez, 2013). En este sentido, la educación financiera no solo contribuye al desarrollo de capacidades individuales, sino que también promueve comportamientos económicos más responsables y sostenibles.

En el contexto mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2017) y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF, 2018) han impulsado diversas iniciativas orientadas a fortalecer la cultura financiera de la población. Estas políticas públicas reconocen que la educación financiera debe situarse al servicio de los ciudadanos para facilitar la planificación y administración de sus recursos personales, familiares y profesionales, adaptándose además a las características culturales y socioeconómicas de cada región.

La literatura internacional respalda ampliamente la importancia de estas iniciativas. Diversos estudios han demostrado que las personas con mayores niveles de educación financiera tienden a tomar decisiones de consumo más racionales, presentan mayores tasas de ahorro y experimentan mejores condiciones de bienestar económico a largo plazo (Navickas, Gudaitis & Krajinakova, 2014).

La evidencia empírica internacional refuerza estos hallazgos. Por ejemplo, la OCDE ha identificado una relación directa entre alfabetización financiera e inclusión financiera: los países con menores niveles de conocimiento financiero suelen presentar mayores dificultades para ampliar el acceso efectivo a servicios bancarios formales (Atkinson, 2013). En el ámbito educativo, los resultados del programa PISA muestran que los estudiantes con mayores competencias financieras tienen una probabilidad significativamente mayor de ahorrar, comparar precios antes de realizar compras y adoptar decisiones económicas más informadas (OCDE, 2025).

Investigaciones más recientes también han aportado evidencia relevante sobre los efectos de la educación financiera en el comportamiento económico de las personas. Un estudio presentado en arXiv (Frees, Gangal & Shaviro, 2024) demuestra que los cursos de alfabetización financiera pueden generar mejoras significativas en la salud financiera de los individuos, medida a través de indicadores como hábitos de gasto, confianza en la capacidad de pago y habilidades de gestión financiera.

Este énfasis en la educación financiera adquiere particular relevancia en contextos como el de San Luis Potosí, donde la inclusión financiera y el acceso a productos financieros diversificados aún presentan rezagos importantes. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021), una proporción considerable de la población carece de competencias básicas para comprender productos financieros como fondos para el retiro, seguros o instrumentos de inversión.

En consecuencia, la educación financiera no debe entenderse únicamente como un objetivo educativo, sino también como una condición estructural para garantizar la participación plena de la población en el sistema financiero formal y favorecer procesos de movilidad económica. Cuando estas competencias se desarrollan adecuadamente, las personas adquieren herramientas para enfrentar desafíos financieros, administrar mejor sus recursos y construir un futuro económico más sólido.

En el siguiente apartado se analiza cómo estas capacidades se traducen en prácticas concretas de planeación financiera personal, particularmente en contextos donde existen brechas en el conocimiento y uso de servicios financieros.

1.2. Gestión estratégica y planificación de las finanzas personales

La planeación financiera personal constituye una herramienta fundamental para alcanzar estabilidad

económica y bienestar tanto a nivel individual como familiar. Este proceso implica analizar de manera estructurada los ingresos, gastos, deudas y patrimonio con el objetivo de establecer metas financieras claras y diseñar estrategias eficientes para alcanzarlas (Olmedo, 2009).

La importancia de esta disciplina se vuelve especialmente evidente en contextos de incertidumbre económica. Durante crisis financieras como la recesión global de 2008, los hogares que contaban con una adecuada planificación financiera lograron mitigar con mayor eficacia los efectos negativos asociados a la pérdida de empleo o a la reducción de ingresos (Navickas et al., 2014).

La literatura reciente también ha destacado el papel estratégico de la planificación financiera en la estabilidad económica de los hogares. Por ejemplo, Frees, Gangal y Shaviro (2025) validaron matemáticamente la denominada regla del “tercio”, que propone distribuir el ingreso en tres partes destinadas al ahorro, al pago de deudas y al consumo, como un mecanismo eficaz para reducir el riesgo de insolvencia financiera en los hogares.

De manera complementaria, Yeo (2024) señala que el establecimiento de objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo permite una administración más eficiente del flujo de efectivo, facilita la creación de fondos de emergencia y contribuye a reducir el estrés financiero de las familias.

En México, sin embargo, la situación presenta importantes desafíos. Según datos de la CONDUSEF (2009), más del 60 % de la población adulta no lleva un registro sistemático de sus gastos ni elabora presupuestos formales, lo que limita significativamente su capacidad de ahorro e inversión a largo plazo. Esta carencia se traduce en hábitos financieros poco estructurados y en un conocimiento limitado de los derechos y obligaciones asociados a los servicios financieros (Fernández, 2010).

Este déficit resulta particularmente evidente en contextos regionales como el de San Luis Potosí. De

acuerdo con información de la CNBV (2022), una parte importante de la población adulta con ingresos fijos carece de estrategias formales de ahorro y no destina un porcentaje específico de sus ingresos a la creación de fondos para emergencias o metas financieras.

La ausencia de prácticas básicas de planificación, como el registro sistemático de gastos o la elaboración de presupuestos, restringe el acceso a instrumentos financieros más sofisticados (como inversiones o créditos planificados) y limita el potencial de crecimiento económico individual.

Las consecuencias de esta situación son significativas: la falta de planeación financiera incrementa la vulnerabilidad de los hogares frente a eventos adversos, reduce la posibilidad de acceder a crédito en condiciones favorables y limita la acumulación de activos financieros. Diversos estudios internacionales han demostrado que las familias que desarrollan prácticas de planificación financiera presentan menores niveles de endeudamiento y una mayor capacidad para enfrentar crisis económicas (Lusardi & Mitchell, 2014; Danes & Yang, 2014).

En contraste, cuando estas herramientas están ausentes, las decisiones financieras suelen ser reactivas y de corto plazo, lo que afecta de manera directa el bienestar económico de los hogares.

En síntesis, la planeación financiera no debe entenderse únicamente como una práctica individual, sino como una estrategia clave para fortalecer la resiliencia económica de las familias. En contextos como el de San Luis Potosí, fomentar estas prácticas resulta fundamental para cerrar brechas de inclusión financiera y mejorar las condiciones económicas de la población.

1.3. Inclusión financiera y acceso a productos y servicios

La inclusión financiera se define como el acceso y uso efectivo de una amplia gama de servicios financieros formales (como cuentas bancarias, créditos, seguros o

fondos para el retiro) ofrecidos de manera responsable y adaptados a las necesidades de la población (OCDE, 2018; Banco Mundial, 2022).

Este concepto no se limita únicamente a la disponibilidad física de servicios financieros, sino que implica que las personas puedan utilizarlos de manera informada, segura y eficiente, comprendiendo plenamente sus beneficios, costos y riesgos.

La evidencia internacional ha demostrado que una inclusión financiera sólida contribuye a reducir la pobreza, fomentar el ahorro, impulsar la inversión y fortalecer la equidad social (García et al., 2013; Demirgüç-Kunt et al., 2022).

En México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018; 2021) clasifica los productos financieros en cuatro grandes categorías: cuentas, créditos, seguros y ahorro para el retiro. Aunque aproximadamente el 68 % de la población adulta posee al menos un producto financiero, persisten importantes brechas en la diversificación de su uso.

La mayoría de los usuarios se limita a cuentas de nómina o ahorro, mientras que la contratación de productos como seguros, planes de retiro o instrumentos de inversión sigue siendo relativamente baja, especialmente entre segmentos de población con menor educación financiera o ingresos limitados (CNBV, 2022).

Los estudios del Banco Mundial (2022) y de la OCDE (2023) señalan que la diversificación en el uso de servicios financieros permite mejorar la seguridad económica de los hogares, ampliar el acceso al crédito en condiciones favorables y generar mayores oportunidades de inversión. Sin embargo, estos beneficios solo se materializan cuando las personas cuentan con niveles adecuados de educación financiera.

En el caso de San Luis Potosí, los datos disponibles muestran un patrón similar al observado a nivel nacional, aunque con brechas más acentuadas. La mayoría de los

usuarios mantiene únicamente una cuenta de ahorro o de nómina, mientras que la penetración de productos como créditos formales, seguros o planes de retiro sigue siendo limitada (CNBV, 2022).

Esta escasa diversificación financiera reduce las oportunidades de crecimiento económico personal y limita la capacidad de los hogares para enfrentar contingencias como enfermedades, desempleo o emergencias familiares.

Además, la inclusión financiera en la entidad enfrenta desafíos adicionales relacionados con la infraestructura y la cobertura de los servicios financieros. Aunque el desarrollo de la banca digital ha ampliado las posibilidades de acceso, en zonas periurbanas y rurales persiste una fuerte dependencia de sucursales físicas y cajeros automáticos, lo que restringe la adopción de servicios financieros más sofisticados (INEGI & CNBV, 2021).

En este contexto, la educación financiera se convierte en un componente esencial para impulsar procesos efectivos de inclusión financiera. Sin una formación adecuada, la población no solo accede a menos productos financieros, sino que también tiende a utilizarlos de manera ineficiente o riesgosa.

El análisis conjunto de los tres ejes (educación financiera, planeación financiera e inclusión financiera) revela que estas dimensiones se encuentran profundamente interrelacionadas. Cuando una de ellas presenta debilidades, se genera un círculo vicioso que limita la capacidad de los individuos para administrar sus recursos, acceder a servicios financieros adecuados y mejorar su bienestar económico.

En San Luis Potosí, este fenómeno se refleja en los bajos niveles de diversificación financiera, la limitada cultura de ahorro y la escasa preparación para el retiro observada en amplios sectores de la población.

Estas condiciones justifican la necesidad de realizar diagnósticos empíricos específicos que permitan comprender con mayor precisión el comportamiento financiero de la población y orientar el diseño de políticas públicas y estrategias educativas más eficaces.

2. Marco contextual y metodológico

El presente apartado integra el marco contextual y el marco metodológico de la investigación con el propósito de situar el estudio tanto en el entorno geográfico, demográfico y socioeconómico de San Luis Potosí, como en el enfoque científico que orientó su desarrollo.

En primer lugar, se describe el contexto territorial y poblacional del estado, así como las características socioeconómicas de su capital, con el fin de comprender las condiciones que influyen en los niveles de educación e inclusión financiera. Posteriormente, se detalla el diseño metodológico adoptado, especificando el tipo de estudio, la población y muestra, el instrumento de recolección de datos y los procedimientos de análisis utilizados.

2.1. Marco contextual

El estado de San Luis Potosí se localiza en la región centro-norte de México y cuenta con una extensión territorial de 60,983 km², lo que representa aproximadamente el 3.1 % del territorio nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2022). Limita al norte con los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas; al este con Veracruz; al sur con Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; y al oeste con Zacatecas. Esta ubicación estratégica lo convierte en un importante punto de conexión entre el norte y el centro del país, favoreciendo el comercio, la industria y la integración económica regional.

La entidad cuenta con una población total de 2,822,255 habitantes, de los cuales el 50.9 % son mujeres y el 49.1 % hombres (INEGI, 2020). La ciudad de San Luis Potosí, capital del estado, concentra cerca del 30 % de la

población estatal, con aproximadamente 824,229 habitantes, lo que la posiciona como el principal centro urbano, económico e industrial de la entidad.

La densidad poblacional de la capital, junto con su papel como centro logístico, industrial y de servicios, la convierten en un espacio particularmente relevante para analizar fenómenos relacionados con el comportamiento financiero de la población y el acceso a servicios bancarios. En términos socioeconómicos, el estado presenta un Producto Interno Bruto per cápita cercano a los 176,000 pesos anuales, con una estructura económica diversificada que incluye sectores como la manufactura automotriz, la minería, la agricultura y los servicios financieros (INEGI, 2022).

No obstante, persisten importantes desafíos en materia de desarrollo humano y acceso a servicios financieros. Aproximadamente el 44.2 % de la población de la capital cuenta únicamente con escolaridad básica y, aunque la tasa de alfabetización alcanza el 95.3 %, los niveles de educación financiera siguen siendo limitados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021), el acceso y uso de productos financieros formales en el estado se sitúa por debajo del promedio nacional, particularmente en lo que respecta a planes de ahorro para el retiro, seguros y productos de inversión. Esta combinación de crecimiento económico, concentración urbana y brechas en educación financiera convierte a la capital potosina en un escenario especialmente relevante para analizar cómo variables como el nivel educativo, el ingreso o la edad influyen en la planeación financiera y en el uso de productos y servicios bancarios.

2.2. Marco metodológico

El estudio se desarrolló bajo un diseño de investigación no experimental, de tipo transversal y con enfoque cuantitativo correlacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Este enfoque metodológico se seleccionó debido a que el objetivo de la investigación consiste en

analizar la relación entre variables sociodemográficas y comportamientos financieros de la población sin manipular las condiciones del entorno ni intervenir directamente en las variables de estudio. En este sentido, el diseño no experimental permite observar los fenómenos tal como ocurren en su contexto natural, mientras que el carácter transversal posibilita recolectar información en un único momento del tiempo, facilitando la identificación de patrones y asociaciones entre variables dentro de la población analizada.

Asimismo, el enfoque cuantitativo resulta pertinente para este tipo de estudios porque permite medir de forma sistemática variables relacionadas con la educación financiera, la planeación económica y el uso de servicios financieros, posibilitando el análisis estadístico de las relaciones existentes entre ellas. El carácter correlacional del estudio busca identificar posibles asociaciones entre variables sociodemográficas como edad, género, nivel educativo e ingreso, y distintos comportamientos financieros vinculados con la inclusión financiera.

Para el análisis de la información se empleó estadística descriptiva con el propósito de caracterizar el perfil sociodemográfico de la muestra y describir los principales patrones de comportamiento financiero observados. De manera complementaria, se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas con el fin de identificar asociaciones entre variables. En particular, se utilizaron el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, la prueba Chi cuadrada y la prueba t de Student, seleccionadas en función del tipo de variables analizadas y de los objetivos de la investigación.

La población objetivo estuvo conformada por habitantes mayores de 18 años residentes en la capital del estado de San Luis Potosí. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), este grupo representa aproximadamente el 70 % de la población total de la capital, equivalente a 576,960 personas. Debido a las

características del estudio y a las limitaciones operativas para acceder a la totalidad de la población, se empleó un muestreo no probabilístico por juicio del investigador.

El tamaño de la muestra se estimó mediante la fórmula para poblaciones finitas, considerando un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 %, lo que permitió determinar una muestra de 384 participantes. Este tamaño de muestra resulta adecuado para estudios de carácter exploratorio y correlacional, ya que permite obtener estimaciones estadísticamente representativas del fenómeno analizado dentro del contexto urbano de la capital potosina.

El instrumento de recolección de datos consistió en un cuestionario estructurado compuesto por dos apartados principales. El primero estuvo orientado a recabar información sociodemográfica de los participantes mediante siete ítems relacionados con variables como edad, género, nivel educativo e ingreso mensual. El segundo apartado integró cuatro constructos asociados al comportamiento financiero de los participantes: finanzas personales (5 ítems con preguntas dicotómicas, escala Likert y de abanico), planeación financiera (4 ítems con escala Likert, preguntas dicotómicas y opción múltiple), servicios bancarios (4 ítems con escala Likert y de abanico) y productos bancarios (2 ítems con escala Likert y de abanico).

La validez del instrumento fue evaluada mediante un proceso de revisión por dos expertos en el área de finanzas y comportamiento económico, quienes analizaron la pertinencia y claridad de los ítems incluidos en el cuestionario. Posteriormente se realizó una prueba piloto que permitió ajustar la redacción de algunos reactivos y verificar la comprensión del instrumento por parte de los participantes. La confiabilidad del cuestionario se estimó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.733, considerado aceptable para estudios de carácter social y económico, lo que indica un nivel adecuado de consistencia interna en los ítems utilizados.

Para facilitar la interpretación de los resultados, los constructos relacionados con servicios y productos bancarios se integraron posteriormente en un mismo bloque analítico. Esta decisión metodológica permitió examinar de manera conjunta los patrones de uso y preferencia por distintos instrumentos financieros, ofreciendo una visión más integrada del comportamiento financiero de los participantes.

3. Presentación y análisis de resultados

El análisis de resultados constituye una etapa fundamental del proceso de investigación, ya que permite responder a las preguntas planteadas y contrastar la hipótesis del estudio a partir de la evidencia empírica obtenida. En esta sección se interpretan de manera sistemática los datos recopilados mediante el cuestionario aplicado a la muestra de ciudadanos de la capital de San Luis Potosí, con el propósito de identificar patrones de comportamiento financiero y relaciones entre variables sociodemográficas y prácticas financieras.

Para facilitar la comprensión del análisis, los resultados se presentan de forma progresiva. En primer lugar, se describe el perfil sociodemográfico de los participantes, considerando variables como edad, género, nivel educativo e ingreso, con el fin de contextualizar las características de la población encuestada. Posteriormente, se examinan los principales constructos evaluados en el instrumento de investigación: finanzas personales, planeación financiera, servicios bancarios y productos financieros.

El tratamiento de la información combina estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva permite identificar tendencias generales en el comportamiento financiero de los participantes, mientras que las pruebas no paramétricas —particularmente el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, la prueba Chi cuadrada y la prueba t de Student— se emplean para explorar posibles asociaciones entre variables

sociodemográficas y distintos aspectos del comportamiento financiero.

Este enfoque analítico permite no solo describir el nivel de educación e inclusión financiera presente en la población estudiada, sino también identificar factores que influyen en la adopción y uso de servicios financieros. De esta manera, el análisis proporciona evidencia empírica relevante para comprender las dinámicas financieras de la población de la capital potosina y detectar áreas de oportunidad para fortalecer la educación financiera y ampliar la inclusión financiera en el contexto local.

3.1. Del perfil sociodemográfico de la muestra

La población encuestada estuvo conformada por una muestra por conveniencia integrada por ciudadanos mayores de 18 años residentes en la capital del estado de San Luis Potosí. En términos de edad, el grupo predominante se concentró en el rango de 45 a 54 años (46.74 %), mientras que únicamente el 3.13 % correspondió a jóvenes de entre 18 y 24 años. Este resultado sugiere una participación mayoritaria de personas que se encuentran en etapas de madurez laboral y económica, lo cual resulta relevante para el análisis de los hábitos financieros y de la planificación económica en el contexto urbano analizado.

En cuanto al género, la distribución fue relativamente equilibrada, con un 51.04 % de hombres y un 48.96 % de mujeres, lo que permite considerar que la muestra refleja adecuadamente la composición general de la población adulta de la capital potosina.

La cobertura geográfica de la muestra fue amplia, abarcando 120 códigos postales distintos, lo que evidencia una diversidad territorial significativa dentro de la ciudad y su zona conurbada. Esta dispersión espacial contribuye a capturar una variedad de realidades socioeconómicas y condiciones de acceso a servicios financieros dentro del área urbana.

En el ámbito educativo, el nivel de escolaridad más frecuente fue la licenciatura (29.4 %), seguido por la secundaria (23.1 %) y, en menor proporción, la maestría (5.3 %). Este panorama revela un contraste relevante: aunque existe una proporción considerable de personas con estudios superiores, persiste también un segmento significativo con escolaridad básica, lo que podría incidir en el nivel de conocimiento financiero y en la forma en que los individuos interactúan con el sistema financiero formal.

En términos de ingresos, el 30.26 % de los encuestados declaró percibir un ingreso mensual entre \$2,001 y \$6,000 pesos, mientras que solo el 6.84 % reportó ingresos entre \$14,001 y \$18,000 pesos. Asimismo, la principal fuente de ingresos para el 37.7 % de los participantes correspondió a actividades distintas a las categorías laborales tradicionales —como trabajos independientes o informales—, mientras que el 14.66 % señaló el comercio al menudeo como su principal actividad económica.

En conjunto, estos datos reflejan un mercado laboral caracterizado por una elevada heterogeneidad y por la presencia de diversos niveles de formalidad económica, factores que pueden influir de manera significativa en el acceso a servicios financieros, en la capacidad de ahorro y en la adopción de instrumentos bancarios más sofisticados.

A partir de este perfil sociodemográfico general, en los siguientes apartados se analizan los principales constructos relacionados con el comportamiento financiero de los participantes.

3.2. Constructo I: Finanzas personales

Los resultados del primer constructo permiten aproximarse al nivel de conocimiento y a las prácticas relacionadas con las finanzas personales entre los participantes del estudio. En primer lugar, se observa que el 53.44 % de los encuestados acude a instituciones

bancarias para informarse sobre servicios financieros, mientras que únicamente el 2.38 % recurre a prestamistas. Este hallazgo sugiere que las instituciones financieras formales continúan siendo la principal fuente de información para los usuarios, aunque ello no necesariamente implica un uso diversificado o sofisticado de los productos financieros disponibles.

En lo que respecta al conocimiento sobre instrumentos de inversión, la mayoría de los participantes manifestó poseer un nivel de conocimiento regular en inversiones a plazos (37.8 %), negocios (29.7 %) y educación familiar (38.0 %). No obstante, se identificó un desconocimiento considerable en relación con instrumentos financieros más especializados: el 47.8 % declaró no tener conocimiento sobre acciones en la bolsa y el 34.9% indicó desconocer los fondos de inversión. Estos resultados evidencian una barrera importante para el acceso a mercados financieros más complejos y coinciden con los hallazgos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2021), que señala una preferencia generalizada por productos financieros de bajo riesgo y fácil acceso.

En relación con la autopercepción de preparación para tomar decisiones financieras, el 44.8 % de los encuestados se considera regularmente preparado, mientras que el 13.0 % se percibe poco preparado. Este resultado, combinado con los bajos niveles de conocimiento en materia de inversiones, sugiere la existencia de una brecha entre la confianza subjetiva de los individuos y su nivel real de competencia financiera.

En cuanto al conocimiento y uso de fondos de ahorro para el retiro, el 44.5 % indicó conocerlos en grado regular y solo el 13.0 % afirmó tener un conocimiento amplio sobre este tipo de instrumentos. Asimismo, aunque el 58 % de los participantes declaró contar con algún fondo de ahorro para el retiro, el 42 % manifestó no disponer de uno. Este dato resulta especialmente relevante, ya que implica que aproximadamente cuatro de cada diez adultos en la capital carecen de un mecanismo formal de ahorro para su jubilación, lo que podría comprometer su

estabilidad económica en el largo plazo.

En síntesis, los resultados de este constructo evidencian que, si bien existe una relación directa con el sistema financiero formal a través de la banca tradicional, persisten brechas importantes en el conocimiento de instrumentos financieros de mayor rendimiento y en el uso de productos de previsión social. Estas limitaciones podrían obstaculizar una inclusión financiera más profunda, particularmente entre los sectores de la población con menores niveles educativos o ingresos más reducidos.

A partir de estos hallazgos iniciales, el siguiente apartado profundiza en las prácticas de planeación financiera de los participantes.

3.3. Constructo II: Planeación financiera

En continuidad con el análisis de las finanzas personales presentado anteriormente, los resultados del segundo constructo permiten examinar de qué manera los ciudadanos de la capital potosina organizan y planifican sus recursos económicos.

Los datos muestran un interés considerable por conocer distintos productos y servicios financieros, especialmente en lo relacionado con el ahorro (44.6 % manifestó “mucho interés” y 37.6 % “interés regular”), el ahorro para el retiro (47.4 % “mucho interés”) y los seguros (38.5 % “mucho interés”). Este hallazgo sugiere que, a pesar del conocimiento limitado identificado en el constructo anterior, existe una disposición latente por parte de la población para aprender sobre herramientas financieras relacionadas con la seguridad económica y la previsión a largo plazo.

En contraste, el interés por instrumentos vinculados con el mercado de capitales, como la casa de bolsa, resulta considerablemente menor: el 25.8 % manifestó no tener ningún interés y solo el 17.2 % expresó un alto interés. Esta situación confirma la limitada conexión de amplios sectores de la población con los mercados bursátiles,

fenómeno que también ha sido documentado a nivel nacional por la ENIF (2021).

En lo referente a la gestión de los ingresos, el 71 % de los encuestados afirmó elaborar algún tipo de presupuesto, mientras que el 29 % indicó no realizar esta práctica. La elaboración de presupuestos constituye un elemento central de la planeación financiera, ya que permite un control más eficiente del gasto y un seguimiento más sistemático de los objetivos de ahorro. Sin embargo, el hecho de que casi un tercio de la muestra no realice esta práctica sugiere la persistencia de hábitos financieros poco estructurados.

En cuanto al porcentaje del ingreso destinado al ahorro, el 24 % de los participantes indicó ahorrar entre un 6 % y un 10 % de su salario, mientras que el 20 % señaló ahorrar entre un 1 % y un 5 %. Solo el 5 % declaró ahorrar más del 25 % de sus ingresos. Este patrón revela una tendencia hacia niveles de ahorro relativamente bajos o moderados, lo cual puede estar asociado tanto a restricciones de ingreso como a una limitada cultura de planificación financiera.

Si se considera además que el 42 % de los encuestados no cuenta con un fondo de ahorro para el retiro —como se observó en el constructo anterior—, estos niveles de ahorro podrían resultar insuficientes para garantizar una seguridad económica futura.

En conjunto, los resultados de este constructo indican que, aunque existe un interés importante por los productos de ahorro y previsión financiera, este interés no siempre se traduce en prácticas sistemáticas de planificación económica. Por ello, las estrategias de educación financiera deberían orientarse no solo a incrementar el conocimiento, sino también a fomentar hábitos de disciplina financiera y planificación de largo plazo.

3.4. Constructo III y IV: Preferencias y comportamientos en el uso de servicios y productos bancarios

El análisis de los constructos III y IV se centra en examinar las preferencias de los ciudadanos respecto a las instituciones financieras, los canales utilizados para realizar operaciones bancarias y el grado de utilización de diversos productos financieros. Estos elementos permiten comprender con mayor profundidad la forma en que la población interactúa con el sistema financiero formal.

En relación con la institución bancaria preferida, BBVA concentra el mayor porcentaje de preferencia con un 37 % de los encuestados, seguida por Banorte (22 %) y Citibanamex (21 %). En contraste, instituciones como HSBC, Banregio, Santander, Banco del Bajío e Inbursa presentan porcentajes significativamente menores, situados entre el 1 % y el 6 %. Este patrón sugiere una concentración de confianza en un número reducido de instituciones bancarias, fenómeno que también ha sido documentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2022).

En cuanto a los canales utilizados para realizar operaciones financieras, los resultados muestran una clara preferencia por la atención presencial: el 80 % de los participantes señaló acudir directamente a sucursales bancarias, mientras que solo el 20 % utiliza servicios de banca electrónica. Esta marcada inclinación hacia los canales tradicionales puede estar asociada a factores como la confianza personal en el trato directo, la percepción de seguridad y la persistencia de brechas digitales, tal como señalan estudios previos (ENIF, 2021; Banco Mundial, 2022).

Respecto al uso de productos financieros, las cuentas de ahorro presentan una utilización relativamente mayor en comparación con otros instrumentos. No obstante, el 38.3 % de los encuestados indicó que nunca las utiliza y un 19 % señaló utilizarlas solo ocasionalmente. En contraste, productos como cuentas a plazo fijo, cuentas en divisas o cuentas compartidas presentan niveles de uso muy reducidos, con porcentajes superiores al 70 % de no utilización.

De manera similar, el uso de tarjetas de crédito departamentales, créditos bancarios, préstamos hipotecarios y seguros también se mantiene en niveles relativamente bajos, lo que confirma la limitada diversificación de instrumentos financieros entre la población analizada (OCDE, 2018).

En cuanto a los mecanismos de ahorro preferidos, predominan las cajas de ahorro y las instituciones bancarias, mientras que la práctica de guardar dinero en el hogar aparece como una opción marginal.

El análisis inferencial aporta información adicional relevante para comprender las relaciones entre variables:

- No se encontró relación significativa entre la edad y la tenencia de cuentas de ahorro ($p = 0.050$; $p = 0.332$) ni con la posesión de fondos de ahorro para el retiro ($p = 0.118$; $p = 0.023$).
- El nivel educativo mostró una relación positiva, aunque débil, con la preparación para tomar decisiones financieras ($p = 0.253$; $p = 0.000$) y una correlación moderada con el uso de tarjetas de crédito ($p = 0.313$; $p = 0.000$).
- No se identificaron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la elaboración de presupuestos ($p = 0.879$) ni en el porcentaje de ingreso destinado al ahorro ($p = 0.336$).

En conjunto, estos resultados indican que, aunque existe una preferencia clara por instituciones y canales bancarios tradicionales, la diversificación en el uso de productos

financieros sigue siendo limitada. La baja adopción de herramientas como la banca electrónica o instrumentos de inversión más complejos sugiere la persistencia de barreras relacionadas con la confianza institucional, la alfabetización digital y el nivel de educación financiera de la población.

5. Conclusiones

Los resultados de esta investigación permiten afirmar que una proporción significativa de la población adulta encuestada en la capital de San Luis Potosí percibe ingresos mensuales inferiores a \$6,000 pesos, lo que limita su capacidad para cubrir adecuadamente sus necesidades básicas y restringe su margen para el ahorro o la inversión. Esta situación económica se refleja directamente en el bajo interés y conocimiento sobre productos financieros más complejos, como fondos de inversión, seguros especializados, acciones en la bolsa de valores o cuentas en divisas, lo que evidencia una limitada diversificación en el uso de instrumentos financieros.

En relación con la hipótesis planteada, los hallazgos muestran que la edad de los encuestados no influye de manera significativa en la posesión de cuentas de ahorro ni en la existencia de fondos destinados al retiro. En cambio, los resultados sugieren que el nivel de conocimiento e interés en la gestión financiera constituye un factor más relevante para explicar la adopción de ciertos servicios financieros, aunque dicho conocimiento se encuentra condicionado por las restricciones de ingreso que enfrentan amplios sectores de la población.

Asimismo, se identificó que el grado de estudios no incide de manera significativa en la planeación de las finanzas personales ni en la elaboración de presupuestos, prácticas que se distribuyen de manera relativamente homogénea entre hombres y mujeres. No obstante, se detectó una correlación positiva entre el nivel educativo y el uso de tarjetas de crédito, lo que sugiere que una mayor escolaridad puede facilitar el acceso a determinados instrumentos financieros, aunque ello no necesariamente implica una planificación financiera más estructurada.

En conjunto, estos resultados permiten cumplir con el objetivo central de la investigación, que consistió en analizar la relación entre variables sociodemográficas (como nivel educativo, edad, género e ingreso) y los hábitos financieros de la población adulta de la capital potosina. Los hallazgos ponen de manifiesto que, si bien existe una presencia básica de educación financiera asociada al uso de cuentas de ahorro o tarjetas de débito, esta resulta insuficiente para promover decisiones de inversión o una diversificación significativa en el uso de productos financieros. En este sentido, los resultados respaldan lo señalado por Navickas et al. (2014), quienes sostienen que mayores niveles de educación financiera se asocian con decisiones económicas más informadas y con mejores tasas de ahorro a largo plazo.

La evidencia obtenida también pone de relieve que el fortalecimiento de la inclusión financiera en San Luis Potosí requiere un enfoque integral que combine educación financiera, accesibilidad a servicios financieros y diseño de productos adecuados al perfil socioeconómico de la población. No basta con ampliar la disponibilidad de servicios bancarios; es necesario desarrollar estrategias que promuevan el conocimiento, la confianza y el uso responsable de estos instrumentos. En este sentido, las instituciones financieras y los organismos públicos pueden desempeñar un papel clave al ampliar la cobertura territorial de servicios, adaptar su oferta a segmentos de ingresos medios y bajos y promover programas de capacitación financiera orientados a distintos grupos de la población.

Finalmente, los resultados de esta investigación abren nuevas oportunidades para profundizar en el estudio de la educación e inclusión financiera en contextos regionales. En particular, futuras líneas de investigación podrían orientarse a:

1. Analizar el impacto de programas de educación financiera en comunidades de bajos ingresos, evaluando su efecto en la adopción y uso efectivo de servicios financieros formales.
2. Profundizar en la relación entre digitalización bancaria y adopción de la banca electrónica en contextos donde aún predomina el uso de sucursales físicas, con el fin de comprender las barreras tecnológicas y culturales que limitan la transición hacia servicios financieros digitales.
3. Examinar el papel de las microfinanzas, cooperativas de ahorro y otras instituciones financieras alternativas como mecanismos de inclusión para sectores de la población que presentan dificultades para acceder a la banca comercial tradicional.

Asimismo, futuras investigaciones podrían incorporar enfoques longitudinales o comparativos entre regiones, lo que permitiría evaluar la evolución de los niveles de educación financiera y su relación con procesos de inclusión financiera en distintos contextos socioeconómicos.

Con base en los resultados obtenidos, se sugiere el diseño e implementación de talleres, campañas y programas permanentes de educación financiera dirigidos tanto a jóvenes como a adultos, con especial atención a los grupos más vulnerables. Una estrategia articulada entre el sector público, el sistema financiero y las instituciones educativas podría contribuir significativamente a fortalecer la cultura financiera de la población y, en consecuencia, promover una inclusión financiera más amplia que se traduzca en mayores niveles de bienestar y desarrollo económico para San Luis Potosí.

Referencias

- Atkinson, A. (2013). *Promoting financial inclusion through financial education*. OCDE.
- Atkinson, A., & Messy, F. (2011). *Measuring financial literacy: Results of the OECD International Network on Financial Education (INFE) pilot study*. OECD.
- Banco Mundial. (2022). *Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Group.
<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex>
- Bongini, P., Trivellato, P., & Zenga, M. (2015). Business Students and Financial Literacy: When Will the Gender Gap Fade away? *Journal of Financial Management, Markets and Institutions* (ISSN 2282-717X) Fascicolo 1, gennaio-giugno.
<https://doi.org/10.12831/80528>
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2022). *Reporte de inclusión financiera 2022*. CNBV.
<https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documentos/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf>
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2022). *Reporte nacional de inclusión financiera*. CNBV. <https://www.gob.mx/cnbv>
- Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2009). *ABC de la Educación Financiera. Educación Financiera es tu ganancia*.
http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/mat_difusion/abc_09.pdf
- CONDUSEF. (2009). *Encuesta sobre hábitos financieros de la población mexicana*. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
- Cull, M., & Whitton, D. (2011). University students' financial literacy levels: Obstacles and aids. *Economic Papers: A journal of applied economics and policy*, 30(1), 102–108.
<https://doi.org/10.1111/j.1759-3441.2011.00099.x>
- Danes, S. M., & Yang, Y. (2014). Assessment of the use of theories within the *Journal of Financial Counseling and Planning* and the contribution of the Family Financial Socialization conceptual model. *Journal of Financial Counseling and Planning*, 25(1), 16–31.
<https://ssrn.com/abstract=2466560>
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Domínguez Martínez, J. M. (2013). Educación financiera en la escuela: las competencias según el PISA. *eXtoikos: Revista de Educación para el Desarrollo Sostenible*, (11), 123–134.
- Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. (2021). *ENIF 2021*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) & Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
<https://www.inegi.org.mx/programas/enif/>

- Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. (2021). *ENIF 2021*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) & Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). <https://www.inegi.org.mx/programas/enif/>
- Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF). (2018). Documento guía. Comité de Educación Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. <https://www.inclusionfinanciera.gob.mx>
- Fernández, D. (5 de octubre de 2010). ¿Cuál es tu nivel de cultura financiera? CNN Expansión. <http://expansion.mx/mi-dinero/2010/10/05/conducef-tras-la-educacion-financiera>
- Frees, D., Gangal, A., & Shaviro, C. (2024). Quantifying the causal effect of financial literacy courses on financial health. *arXiv preprint*.
- García Muñoz, M., Ruiz Dávila, J., & Marín Montoya, C. (2020). Inclusión financiera y educación financiera como herramientas de desarrollo económico. *Economía UNAM*, 17(50), 63–88. <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2020.50>
- García, N., Grifoni, A., López, J., & Mejía, D. (2013). *La educación financiera en América Latina y el Caribe: Situación actual y perspectivas*. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/380>
- García, N., Grifoni, A., López, J., & Mejía, D. (2013). *La educación financiera en América Latina y el Caribe: Situación actual y perspectivas*. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/380>
- Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (2021). *Programa Institucional SIFIDE*. Secretaría de Finanzas. <https://www.slpfinanzas.gob.mx/planeacionypresupuesto/descargas/programas-institucionales/Programa-Institucional-SIFIDE.pdf>
- Gómez, J. (2015). Diagnóstico sobre cultura financiera en jóvenes universitarios. *Revista de Administración y Finanzas*, 8(2), 45–58.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía & Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2021). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021*. INEGI; CNBV. <https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2021/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). *Encuesta intercensal 2015*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Censo de Población y Vivienda 2020*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Anuario estadístico y geográfico de San Luis Potosí 2022*. INEGI. <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825622292>

- Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Navickas, V., Gudaitis, T., & Krajnakova, E. (2014). Influence of financial literacy on management of personal finance in a young household. *Business: Theory and Practice*, 15(1), 32–40. <https://doi.org/10.3846/btp.2014.03>
- Navickas, V., Gudaitis, T., & Krajnakova, E. (2014). Influence of financial literacy on management of personal finance in a young household. *Business: Theory and Practice*, 15(1), 32–40. <https://doi.org/10.3846/btp.2014.03>
- OECD. (2025). *The role of financial literacy*.
- Olmedo Figueroa Delgado, L. (2009). Las finanzas personales. *Revista Escuela de Administración de Negocios*, 123-144. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20612980007>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion*. OECD. <https://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Advancing Financial Inclusion through Digital Financial Services*. OECD. <https://doi.org/10.1787/9789264281318-en>
- Raccanello, K., & Herrera, A. (2014a). Educación financiera y bienestar: Evidencia internacional. *Estudios Económicos*, 29(2), 115–145. <https://doi.org/10.24201/ee.v29i2.15>
- Raccanello, K., & Herrera, A. (2014b). Inclusión financiera en México: determinantes y efectos. *Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico*, (21), 7–42.
- Stangl, K., & Matthews, C. (2012). Promoting financial literacy: Implications for economic wellbeing. *Journal of Consumer Policy*, 35(4), 493–507. <https://doi.org/10.1007/s10603-012-9206-6>
- Taylor, S., & Wagland, S. (2009). Financial literacy: A review of government policy and initiatives. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 3(2), 101–125. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v3i2.7>
- Yeo, K. H. K. (2024). Financial planning behavior: A systematic review and new theory development. *Journal of Behavioral Finance and Economics*.